



Tensión en Colchane: primeras trabas en frontera exponen el costo real del nuevo control migratorio

Las primeras horas de aplicación del nuevo endurecimiento fronterizo impulsado por el Presidente José Antonio Kast ya comenzaron a mostrar efectos concretos en el norte del país. En la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en la Región de Tarapacá, se difundieron durante las últimas horas registros y reportes en redes sociales que daban cuenta de dificultades, esperas prolongadas y complicaciones para personas que buscaban ingresar a Chile por vía terrestre, en medio del nuevo escenario abierto tras la firma del decreto presidencial sobre control migratorio en la macrozona norte.

La situación comenzó a cobrar notoriedad luego de que medios y cuentas en redes del vecino país mostraran imágenes y testimonios desde el entorno fronterizo de Pisiga-Colchane. Uno de esos registros señalaba la presencia de decenas de buses y una fuerte congestión de personas intentando cruzar hacia territorio chileno, en un contexto marcado por incertidumbre y versiones cruzadas respecto de

los nuevos controles y del alcance efectivo de las medidas anunciadas por el gobierno de Kast. Dado que buena parte de estos antecedentes circuló inicialmente en redes sociales, su detalle puntual debe ser leído con cautela, pero la secuencia coincide con el momento en que el Ejecutivo chileno comenzó a instalar su nueva política de cierre y contención fronteriza.

El telón de fondo es conocido. En su primer día de mandato, Kast firmó un paquete de decretos enfocados en seguridad y migración, entre ellos la Política Nacional de Cierre Fronterizo y el llamado Plan Escudo Fronterizo, que contempla zanjias, barreras físicas, refuerzo militar, drones, sensores y una mayor coordinación entre Fuerzas Armadas, policías y servicios estatales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El gobierno ha planteado que el objetivo es cerrar la porosidad de la frontera norte y reducir drásticamente el ingreso irregular en los próximos meses.

En esa lógica, Colchane vuelve a instalarse como uno de los puntos más sensibles del país. No solo por su condición geográfica, sino porque desde hace años se transformó en símbolo de la crisis migratoria, del ingreso por pasos no habilitados y de la presión permanente sobre una comuna pequeña que ha debido convivir con un fenómeno de escala nacional e internacional. Cada cambio en la política de control fronterizo tiene allí un impacto inmediato, tanto en el flujo de personas como en la percepción local de orden o desborde.

La dimensión regional del problema es ineludible. Lo que ocurre en Pisiga y Colchane no queda encerrado en la frontera. Repercute en Tarapacá, en Iquique, en Alto Hospicio y en toda la cadena institucional que debe responder frente a presión migratoria, seguridad pública, salud, transporte y control territorial. Por eso, más allá del efecto político que el nuevo gobierno buscó instalar con su

Reportes difundidos desde Bolivia y en redes sociales dieron cuenta de complicaciones para personas que intentaban ingresar a Chile por tierra desde Pisiga, en las horas posteriores al primer decreto fronterizo del Presidente José Antonio Kast.

primer decreto, el verdadero examen estará en la capacidad del Estado chileno para ordenar el flujo, diferenciar entre control regular e ingreso irregular, y evitar que el endurecimiento de la frontera derive en nuevas escenas de caos, improvisación o crisis humanitaria en la puerta norte del país.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha presentado el plan como una señal de autoridad y como una respuesta a una demanda ciudadana que se arrastra desde hace años. El problema es que toda política de frontera no solo se mide por su dureza, sino por su capacidad operativa. Si la medida genera control efectivo, trazabilidad y orden, el gobierno podrá exhibir resultados. Pero si lo que emerge son aglomeraciones, confusión, atochamientos y personas atrapadas entre mensajes políticos duros y una ejecución todavía en ajuste, la señal de autoridad

corre el riesgo de convertirse rápidamente en una imagen de tensión fronteriza mal administrada.

En Tarapacá, donde el debate migratorio dejó hace tiempo de ser abstracto, lo ocurrido en las últimas horas debe ser leído con atención. Porque una cosa es anunciar zanjias, barreras y despliegues militares; otra, muy distinta, es administrar en terreno las consecuencias humanas, logísticas y políticas de esa decisión. La región sabe mejor que nadie que las fronteras no se ordenan solo con decretos. Se ordenan con presencia estatal sostenida, coordinación real y claridad institucional para que el control no termine pareciéndose, una vez más, a una improvisación con alto costo local.

Ese será el punto decisivo de esta nueva etapa. Si el gobierno quiere demostrar que esta vez el norte no



seguirá siendo una frontera porosa, deberá probar también que tiene la capacidad de evitar que Colchane vuelva a convertirse en la imagen de una crisis que se anuncia como solución, pero que en la práctica puede seguir golpeando a la región con la misma crudeza de siempre.